



CONSTANCIA: El término del anterior traslado transcurrió los días 21-22 y 25 de julio con silencio de la parte demandada.- INHABILES: 20- 23 y 24 de julio. A Despacho

CONSUELO GONZALEZ LOPEZ  
Secretaria

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO  
Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Julio veintisiete (27)  
de dos mil veintidós (2022). Rad. 2022/300

Contra el auto de fecha julio 11 del presente año, a través del cual dispuso el Juzgado no conceder el recurso de apelación contra la providencia del 22 de junio de 2022, el Actor Popular interpuso recurso de Reposición.

Sustentó el mismo indicando:

(...), presento reposición como requisito para tutelar pido reponga el auto donde niega la apelación frente al auto que liquida de manera concentrada las costas, amparado CGP YA EN TUTELA LA H CSJ S LABORAL LE HA ORDENADO TRAMITAR LA ALZADA AL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA, STL10011-2018 MP JORGE L QUIROZ ALEMAN . PUES LA LEY ES CLARITICA, Y DICE QUE PROCEDE REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACIÓN FRENTE AL AUTO QUE DE MANERA CONCENTRADA LÍQUIDA AGENCIAS EN DERECHO. SIENDO ASI, PIDO REPONGA EN DERECHO Y CONCEDA APELACIÓN AMPARADO CGP. EL MISMO TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA EN TUTELA STL14482-2018 MP CLARA CECILIA DUEÑAS, , CONSIGNA ,,,, numeral 5, art 366 CGP, PROCEDE RECURSO DE REPOSICION Y APELACIÓN. SIENDO ASI, PIDO UNA BES SEGURIDAD JURÍDICA.

Del mencionado recurso se dio traslado a la parte demandada quien guardó silencio.

CONSIDERACIONES:

La Ley 472 de 1998 regula el trámite de las acciones populares, norma que con respecto al tema de los recursos establece:

“ARTICULO 36. RECURSO DE REPOSICIÓN. Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil.



ARTICULO 37. RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir de la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal competente.

De conformidad con las normas referenciadas, las decisiones proferidas en el curso de una acción popular son susceptibles únicamente del recurso de reposición, salvo la que decreta una medida cautelar y la sentencia de primera instancia, decisiones contra las cuales procede el de apelación.

Se concluye entonces que solo contra los autos que se profieran en el trámite de la acción constitucional procede el recurso de reposición, en los términos del Código de Procedimiento Civil hoy Código General del Proceso, en lo que corresponde a los elementos de oportunidad y trámite (artículo 36 ley 472 de 1998).

La Corte Constitucional al hacer un estudio de la constitucionalidad del Artículo 36 de la Ley 472 de 1998 en sentencia C-377 de 2002 avaló dicha norma concluyendo que las únicas providencias posibles del recurso de apelación, tal y como lo determinó el legislador de 1998 son el que decreta una medida cautelar y la sentencia de primera instancia.

Así expuso:

“El artículo 36 de la Ley 472 de 1998, que se demanda, dispone que contra los autos dictados durante el trámite de la acción popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil. En criterio del demandante la norma impugnada infringe el Ordenamiento Fundamental, puesto que al impedir la interposición del recurso de apelación, especialmente respecto del auto que rechaza la demanda, desconoce el derecho de defensa, el principio de la doble instancia y el acceso a la administración de justicia (CP arts. 29, 31 y 229) así como la efectividad de los derechos e intereses colectivos amparados con el ejercicio de las acciones populares. Para resolver los cargos planteados por el actor y con el fin de establecer si la facultad de configuración legislativa en este caso se ejerció de acuerdo a las disposiciones constitucionales y sin violar los derechos y garantías fundamentales, considera la Corte pertinente referirse en primer término a los antecedentes legislativos de la norma acusada. El iter



legislativo pone de presente que la propuesta legislativa inicialmente se orientó hacia la consagración del recurso de reposición contra todos los autos que dicte el juez o magistrado, previendo la posibilidad de interponer el de apelación contra las providencias que señala el Código de Procedimiento Civil y además contra el auto que decreta medidas previas, el que niegue la práctica de alguna prueba y contra la sentencia de primera instancia.[10] En estos términos la iniciativa se conservó durante el primer y segundo debate en la Cámara de Representantes.[11] En el Senado de la República se dio un giro fundamental, pues para agilizar el proceso se propuso que las providencias que se dicten en el trámite de la acción popular, con excepción de la sentencia, carecerían de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas contra el cual se establecía el recurso de reposición. El recurso de apelación se reservaba para la sentencia de primera instancia.

“Posteriormente, en la ponencia para segundo debate en el Senado se decidió acoger las recomendaciones "en orden a garantizar el derecho de defensa y permitir el recurso de reposición contra todos los autos de trámite que se dicten el proceso"[13] y así fue como finalmente el texto del artículo 36 de la Ley 472 de 1998 estableció el recurso de reposición contra los autos dictados durante el trámite de las acciones populares. Hecha esta precisión, para la Corte es claro que la medida contenida en la norma bajo revisión no se opone a la Carta Política pues consulta la naturaleza expedita de las acciones populares, en la medida en que al imprimírle celeridad a su trámite judicial propende por la efectividad de los derechos e intereses colectivos amparados por dichas acciones, que según se analizó se caracterizan por demandar del Estado una labor anticipada de protección. Debe recordarse que en el contexto de la Ley 472 de 1998, la celeridad del procedimiento está dada fundamentalmente por el establecimiento de un término breve para proferir la decisión respectiva (art. 34), para lo cual el juez debe impulsar oficiosamente la actuación so pena de ser sancionado disciplinariamente, y sin que ello pueda comportar el desconocimiento de las reglas fundamentales del proceso pues en las acciones populares el juez tiene la obligación de velar "por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes" (art. 5°). En criterio de esta Corporación la determinación que se analiza tampoco implica sacrificio alguno del derecho de defensa y del derecho de acceder a la administración de justicia (CP arts. 29 y 229), puesto que con la consagración del recurso de reposición el accionante puede ejercer libremente su derecho de controvertir las decisiones adoptadas por el juez durante el trámite de las acciones populares a fin de que éste funcionario revise la validez de su propia determinación revocándola o reformándola”.

En lo que respecta a la tutela citada en el recurso, es importante anotar que las sentencias de tutela solo tienen efecto inter partes, es decir solo para el caso específico estudiado por el Juez Colegiado en esa oportunidad, además de lo anterior se trata de una tutela de la Sala



Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que no es el máximo órgano de la especialidad Civil, teniendo la Sala Civil otro criterio sobre el punto, el cual es compartido por este Despacho Judicial.

No se REPONDRÁ entonces la decisión adoptada por el Juzgado en proveído del 11 de julio del presente año.

Por tanto, el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO de Santa Rosa de Cabal, Resuelve:

Primero: NO REPONER la decisión adoptada por el Juzgado el pasado 11 de julio del corriente año, por lo antes indicado.

COPIESE y NOTIFÍQUESE,

**SULI MIRANDA HERRERA**  
Juez

Firmado Por:

Suli Mayerli Miranda Herrera

Juez Circuito

Juzgado De Circuito

Civil 001

Santa Rosa De Cabal - Risaralda

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **880ccec9b34b18780536f392b4bb20e89caec72095170a51c01c681af9c26ff6**

Documento generado en 27/07/2022 02:26:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>